

El PSOE pide a los populares que retiren su recurso contra el Estatuto

El PP denuncia presiones y responsabiliza a Rodríguez Zapatero

ANABEL DÍEZ / FERNANDO GAREA - Madrid

EL PAÍS - España - 27-11-2009

La respuesta a la publicación conjunta de la prensa catalana de un editorial se tradujo en críticas cruzadas. El PSOE y el PP se responsabilizaron mutuamente del conflicto sobre el Estatuto. Y los nacionalistas culpan al PSOE y al PP y consideran adecuada la publicación de ese editorial conjunto.

GOBIERNO: "Es constitucional"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se limitó a decir que ha leído "con mucho interés" el editorial y que "respeto" la libertad de expresión. Y otros miembros del Gobierno, como Elena Salgado y Francisco Caamaño, pidieron que se deje trabajar al Constitucional. El ministro de Justicia, coautor del texto final del Estatuto, defendió que el Tribunal tiene "plena legitimidad" para decidir. La ministra de Defensa y dirigente del PSC, Carme Chacón, aseguró que "el camino más corto" es que "el PP retire el recurso" de inconstitucionalidad. Chacón reafirmó su convencimiento de que es "absolutamente constitucional" después de que el Congreso hiciera "un trabajo duro, complejo, largo, costoso, pero impecable", para que el texto se ajustara a la Ley Fundamental. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, considera que el editorial no puede interpretarse como "presión" a los magistrados y se mostró convencido de que éstos actuarán con "independencia" y avalarán la constitucionalidad.

PARTIDO POPULAR: "Zapatero es responsable"

El PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, pidió respeto "a las reglas de juego" y a lo que diga el Constitucional, y sus dirigentes repitieron la primera línea del argumentario que distribuyeron entre ellos: la exigencia de responsabilidades a Zapatero. Así, Soraya Sáenz de Santamaría dijo que "el origen es la irresponsabilidad con la que Zapatero abrió este debate. Se comprometió a algo a lo que no debería haberse comprometido. Debiera haberse solucionado con gran consenso. Él es el principal responsable y debe dar explicaciones a la sociedad catalana".

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, dieron un paso más y consideraron como presión al Constitucional el editorial. Cospedal aseguró que es "absolutamente intolerable" que se presione al Tribunal desde el ámbito político "o desde cualquier otro punto de vista". Sánchez-Camacho criticó la "campaña de desprestigio y presión" al Tribunal desde círculos políticos y mediáticos para condicionar la sentencia.

PARTIDOS CATALANES: "Libertad de expresión"

"Yo no entiendo el editorial como una presión hacia el Tribunal, lo entiendo como el ejercicio de libertad de expresión, aquí la única presión sería que ha habido es la que practican PSOE y PP de no permitir la renovación de los miembros que tienen expirado su mandato", aseguró el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida (CiU). El diputado Jordi Xuclà denunció "situaciones anómalas, como las recusaciones a magistrados con razones turbias y que no se renovara a sus miembros".

Para ERC e ICV, el Constitucional no debería pronunciarse sobre el Estatuto por aprobarse en referéndum y por carecer de legitimidad, ya que un tercio de sus miembros ha acabado ya su mandato. Joan Ridaó (ERC) aseguró que el editorial es una "exigencia de respeto a la voluntad" del pueblo catalán, y el Tribunal "no tiene legitimidad" para oponerse porque está "caducado" y "politizado". Joan Herrera (ICV) aseguró que el editorial "expresa un sentimiento muy generalizado en Cataluña". Rechazó que se presione al tribunal y añadió: "Estamos con Solé Tura en que no debería pronunciarse sobre estatutos aprobados en referéndum".

PSOE: "El PP debe responder"

José Antonio Alonso aseguró que "el Estatuto es constitucional y quien ha provocado este conflicto es el PP al presentar un recurso prácticamente contra todo el Estatuto y debe responder ante la sociedad catalana". En esa línea se manifestaron Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, quien censuró las "presiones" al Constitucional. Y Rafael Simancas, que aseguró que "es inaceptable que el editorial considere un menoscabo a la dignidad de Cataluña, toda posición crítica hacia el contenido del Estatuto".

OTROS: Envidia del PNV

El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, felicitó a la prensa por "una iniciativa sana y positiva", deseó que pudiera producirse algo parecido en Euskadi y rechazó que sea una presión. Para Francisco Jorquera (BNG), "el Tribunal no debe tener la tentación de actuar como una tercera cámara legislativa, ignorando la voluntad del legislador". Y para Rosa Díez (UPyD), "se presiona al alto tribunal no sólo por la prensa

catalana subvencionada, sino por instituciones que no están haciendo posible que se dicte sentencia con absoluta libertad".